

Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Simon Guzman.—M. Zavala.—Enrique Landa secretario.

Es copia que certifico. México, 28 de Abril de 1874.—Alejo Gomez Eguarte, oficial mayor segundo.

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por la Sra. Dª Remedios Flores y Torices, contra una resolución del Ministerio de Hacienda, en virtud de la cual fué despojada de la casa número 4 de la calle de Chiconautla, de que es propietaria.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Promotor fiscal mi antecesor, pidió con fecha 28 de Octubre del presente año lo que entendió procedía, en vista del recurso de amparo interpuesto por la Sra. Dª Remedios Flores y Torices, teniendo también á la vista, el informe con justificación que se pidió al Ministerio de Hacienda, referente á los hechos de que pidió amparo; y para formar un juicio mas exacto, concluyó indicando que podía recibirse á prueba.

El Juzgado decretó de conformidad, pidiendo á la Tesorería se sirviera informar si asistían en esa oficina constancias de haberse cubierto por Dª María de Jesus Torices, la parte de papel y de dinero, que por la escritura de cuatro mil pesos, valor de la casa número 4 de la calle de Chiconautla, verificó en Abril de 1861; y al Ministerio de Hacienda, á fin de que se sirviera remitir todas las constancias, ó su copia referentes á la casa expresada de Chiconautla.

Por el Ministerio de Hacienda se remitió el expediente original instruido en la sección 6ª con motivo de la adjudicación

que se hizo al C. Felipe Cortés, subrogando en los derechos del C. Rafael Fernandez, quien denunció la expresada casa, por que el poseedor de ella, no habia hecho la redencion, como podia asegurarlo la oficina respectiva.

La Tesorería dice en su informe, que con toda escrupulosidad se habian revisado los libros de las cuentas de dicha oficina desde el mes de Abril del año de 1861, y que no aparecía partida alguna, ni en numerario por pagarés otorgados en virtud de la redencion del capital, ni en ninguna clase de créditos de la deuda nacional; que tampoco existían antecedentes de ninguna clase que tuvieran analogía con la operacion de que se trataba. Concluye este informe diciendo el C. Tesorero, que si la persona interesada asegura haber efectuado las exhibiciones correspondientes, podía comprobarlas facilmente presentando la liquidacion practicada por la oficina especial de desamortización, donde debía existir el recibo de las especies, otorgado por el C. Francisco Mejia, jefe que fué de aquella oficina; el certificado de entero de los bonos que debe haber satisfecho al fenecer el plazo de la obligación, y con los pagarés legalizados con el sello de la misma oficina.

El Sr. Ministro de Hacienda manifiesta, que no le era posible recordar pormenor alguno relativo al negocio de la Sra. Torices, por el innumerable concurso de asuntos que fluyeron en la época en que estaba encargado de la oficina de desamortización, y supuesto el término transcurrido; pero que de presumirse era, que hubiera causa justa que impidiera el que dicha escritura se firmara.

Por todas las pruebas que se han traído á la vista, y por las que constan en el presente juicio de amparo, puede asegurarse sin temor alguno, que si hay un negocio que dé la certidumbre legal de los hechos, cuya comprobación se pretende, el que nos ocupa es sin duda uno de ellos. Respetando pues el escrúpulo del Sr. Promotor mi ante-

cesor, pues nunca estan por demás la acumulacion de datos para afirmar las decisiones legales, hará presente el que suscribe que el recurso de amparo interpuesto por la Sra. Torices, bien fundado en un supuesto falso, puesto que la resolucíon del Supremo Gobierno al adjudicar la casa al C. Felipe Cortés, no ha cometido acto alguno que importe ni directa, ni indirectamente despojo á la Sra. mencionada.

El Ministerio de Hacienda, al mandar que se otorgara la escritura de subrogacion en los derechos del erario á la casa número 4 de la calle de Chiconautla al C. Felipe Cortés, no hizo otra cosa que cumplir con un acuerdo del Supremo Gefe de la Nacion; y éste acuerdo no fué intempestivo, fué la decision meditada despues de haberse sustanciado un juicio contradictorio entre dos personas, que sobre una misma cosa alegaban derechos que mutuamente sostenian segun su intencion. Consta en el expediente instruido en la seccion 6ª del Ministerio de Hacienda, que ha tenido á la vista el Promotor que suscribe, que tanto al denunciante, como al poseedor de la casa referida, se les oyó, y se les recibieron cuantas pruebas creyeron conducentes presentar y hacer valer, puesto que una de las partes pretendia probar, que la adjudicacion que se le habia hecho en 1861, estuvo arreglada á las leyes de la materia, y habia adquirido bien; mientras que el denunciante, pretendia comprobar, que la operacion nunca llegó á verificarse con arreglo á esas mismas leyes, y de consiguiente no habia podido adquirirse tal propiedad.

Como resultado de ese debate, franco sin restriccion de ningun género, sostenido ante la autoridad única competente en la materia, se sirvió el Supremo Gobierno resolver, que el erario nacional tenía derecho en esa casa; cuyo derecho transmitió al denunciante, conforme á las mismas leyes de desamortizacion de bienes que pertenecieron á corporaciones eclesiasticas, y que por ministerio de la ley entraron al dominio de la Nacion.

Esta decision suprema, referente á la presente cuestion y á todas las que sean de igual naturaleza, jamás puede calificarse de despojo; podrá tal vez en algun caso lastimar, no derechos adquiridos sin duda alguna, y aun en este no comun caso, queda el recurso ante los tribunales del fuero comun, el juicio contradictorio y amplísimo sobre preferencia de derechos.

Se invoca por la Sra. Torices, la violacion de los artículos 14, 16 y 24 de la Constitucion, para fundar el recurso de amparo que ha interpuesto.

No será el Promotor el que funde la inexactitud con que se aplican al presente caso dichos artículos, pues es concluyente lo que espone la seccion sexta en su consulta al Supremo Gobierno que en lo conducente dice: "El Supremo Gobierno en uso de sus facultades administrativas declaró en 27 de Setiembre de 1871, que el C. Salazar no habia probado su intencion; que era falsa la orden que se suponía dirigida al C. Natera, y que estando espedita la autoridad administrativa para subrogar en los derechos buenos ó malos, ciertos ó disputables del Fisco, al C. Cortés que lo solicitaba, redimiere éste el precio de la finca y se le otorgase la correspondiente escritura de subrogacion, sin ordenar á sus agentes ni siquiera recomendar á los judiciales que pusieran en posesion de la espresada finca al subrogatario." Esta consulta que por via de informe dió la seccion 6ª, fué aprobada por el C. Presidente de la República y de conformidad con ella, se sirvió acordar la subrogacion en el C. Cortés, (oficio de 24 de Setiembre de este año 59). Con lo espuesto y reproduciendo el pedimento anterior, como complemento del presente, y los fundamentos que desde entonces se espusieron, concluye pidiendo el que suscribe, se sirva el Juzgado declarar: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Sra. Dª Remedios Flores y Torices porque la resolucíon administrativa del Supremo Gobierno que subroga al C.

Felipe Cortés en los derechos del Fisco á la casa número 4 de la calle de Chiconautla, que posea dicha señora á título de adjudicataria, no importa violacion de los artículos 14, 16 y 24 de la Constitucion política de la República.

México, Diciembre 6 de 1873.—Lic. J. Biviano Beltrán.

*Sentencia del O. Juez de Distrito.*

México, Enero 13 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por la Señora D<sup>a</sup> Remedios Flores y Torices, contra la resolución del Ministerio de Hacienda dictada en 27 de Setiembre de 1871, por reputar violadas con ella y en su persona, las garantías que consignan los arts. 14, 16 y 27 de la Constitucion; visto el informe de la autoridad respectiva en el caso; lo pedido por la parte fiscal; las pruebas y alegatos y demas que ver convino; atendiendo: á que la violacion de garantías porque se interpone la queja, se hace consistir en que habiéndose efectuado en el año de 1861, por la Señora madre de la quejosa, la redencion del valor de la casa número 4 de la calle de Chiconautla y otorgado y satisfecho los respectivos pagarés, aunque no fué firmada la escritura de adjudicacion por el entonces Gefe de la oficina, al resolverse posteriormente por el Ministerio de Hacienda la insubsistencia y la falta de derechos, con respecto á la operacion que la quejosa dice hecha á su favor, se han violado los arts. 14, 16 y 27 de la Constitucion, y considerando, 1<sup>o</sup>, en cuanto al art. 14: que si bien en este se consigna la no retroactividad en la aplicacion de las leyes, consistiendo tal efecto en que derechos legítimos y anteriormente adquiridos no se varían por ley ó disposicion posterior, y no pudiendo llamarse legítimos y adquiridos derechos los que la quejosa alega, por que supuesta la circunstancia de que no fué firmada la escritura de adjudicacion por el otorgante de-

signado por la ley, no puede decirse comprendido el caso en el art. 2<sup>o</sup> de la ley de 11 de Mayo de 1868, que designó como irrevocables, aunque adoleciesen de irregularidad, los derechos provenientes de operaciones de desamortizacion, por que faltando como ha faltado el otorgamiento de la respectiva escritura, no ha habido operacion legítima ó revalidada que constituyendo derechos adquiridos, se puedan decir destruidos ó variados por la resolución posterior del Ministerio de Hacienda; y considerando 2<sup>o</sup>: que con relacion á los artículos 16 y 27 que tambien se invocan como violados con la citada resolución de 27 de Setiembre, hay que tener presente, el que por atribucion especial de la ley, corresponde al Ministerio de Hacienda resolver sobre las denuncias, adjudicaciones y redenciones de los bienes llamados de desamortizacion, como la autoridad competente para ello; que las autoridades ya judiciales ó administrativas que en uso de su competente autorizacion resuelven los derechos de partes, no puede decirse efectúan la expropiacion de que habla el art. 27 constitucional, por que este se contrae al caso en que reconociéndose previamente la propiedad del que se dice despojado, sin embargo, por causa de utilidad pública ó sin ella, se determinase la expropiacion sin previa indemnizacion, lo que en el presente juicio no tiene lugar, por que el Ministerio ha declarado competentemente y en ejercicio de sus atribuciones, que la finca en cuestion no es ni ha sido de la propiedad de la quejosa.

Por tales consideraciones, y atento lo pedido por la parte fiscal, se declara: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Señora D<sup>a</sup> Remedios Flores y Torices, contra la resolución del Ministerio de Hacienda de 27 de Setiembre de 1871, por no violarse con ella las garantías que consignan los arts. 14, 16 y 27 de la Constitucion que la quejosa invoca.

Hágase saber; publíquese, y previa citacion del C. Promotor fiscal, elévense los

autos á la Corte Suprema de Justicia.

Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé.—*José María Canalizo.*—*Fernando Zamora*, secretario.

Es copia. México, Enero 23 de 1874.—*Fernando Zamora*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 25 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de esta Capital, por la Señora Dª Remedios Flores y Torices, contra la resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 27 de Setiembre de 1871, en virtud de la cual fué despojada de la casa número 4 de la calle de Chiconautla de que es propietaria, con violación de las garantías consignadas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución federal; y

Considerando: Que la resolución del Ministerio de Hacienda que declara no estar justificado que Dª María de Jesus Torices, madre de la quejosa, hubiera verificado la redención de la finca, ó que por gracia especial se le hubiera condonado el precio de esta, y mandó en consecuencia adjudicarla al denunciante C. Felipe Cortés, no pudo tener por sí sola como consecuencia legal é inmediata, el efecto de hacer perder á Dª Remedios Torices los derechos que tenía adquiridos sobre la casa, ni privarla de su posesión á favor del nuevo cesionario del Gobierno, sino que antes era preciso fuera vencida en el juicio correspondiente de preferencia, establecidos por las leyes de desamortización, lo cual aun no se ha verificado.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 16, 27, 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

1º Es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez 2º de Distrito de esta Capital en 13 de Enero del presente año, por la que declaró no proce-

der el amparo federal en el presente caso.

2º La Justicia de la Union ampara y protege á la Señora Doña Remedios Flores y Torices, contra el despojo que sufrió, de la casa número 4 de la calle de Chiconautla, en virtud de la resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 27 de Setiembre del año de 1871.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándola testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal plen de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*J. M. Iglesias.*—*P. Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*J. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*H. Lanla*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 9 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Domingo Evla en nombre del C. diputado Evaristo Esquivel, contra el C. coronel José Matilde Alcoser, que con el carácter de encargado del poder Ejecutivo del Estado lo puso preso.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Matilde Alcoser, ha evacuado el informe que deben rendir sobre lo principal del acto reclamado contra él en este juicio de amparo, pero las razones en que lo apoya, ni la copia certificada de la declaración de bien preso del quejoso, que acompaña á